

Más de 2.800 personas serán desalojadas de la toma Alto Molle

El delegado Medalla informó que se afinan detalles logísticos y sociales para un desalojo ordenado y con catastro actualizado.

José Portales Durán
 cronica@estrellaiquique.cl

El delegado presidencial regional de Tarapacá, Pedro Medalla, informó sobre el avance del plan de desalojo del sector Z2 del campamento Alto Molle, en Alto Hospicio, en el marco de las reuniones de coordinación con diversos servicios públicos y organismos internacionales. La instancia, en la que participan Carabineros, Serviu, Senama, Senadis, Unicef y otros actores, busca garantizar un proceso ordenado, con resguardo social y apegado a lo instruido por la Corte Suprema. A más de seis meses de que el máximo tribunal ordenara la restitución del patio Z2, las autoridades continúan trabajando sobre la base del catastro iniciado en diciembre de 2025, que definirá las medidas a implementar para las familias afectadas.

El fallo de la Corte Suprema estableció que el desalojo debe ejecutarse de forma ordenada y digna, que los habitantes sean informados previamente y que se habiliten albergues para niñas, niños, personas mayores y

grupos vulnerables. En diciembre, cuando comenzó el catastro, se subrayó el rol clave de la Municipalidad de Alto Hospicio, encargada de disponer un lugar para resguardar a las familias luego del desalojo. En esa etapa también se evaluaron alternativas como la habilitación de un terreno de Bienes Nacionales para el traslado o la eventual compra de una parte del terreno por parte del Gobierno.

Medalla detalló que las reuniones de los lunes permiten "evaluar e ir aterrizando cuáles son las funciones y tareas que tiene cada uno de los servicios", y que Carabineros presentó el contingente que estará disponible para el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, con el fin de reaccionar ante eventuales requerimientos.

En materia de habitabilidad, la Municipalidad de Alto Hospicio propuso tres recintos como posibles albergues transitorios: el Gimnasio Municipal, la explanada del Parque Santa Rosa y el Estadio Municipal. Sobre la definición del lugar, el delegado recalcó que se pidió analizar la mejor alternativa considerando te-



MEDALLA CONFIRMÓ QUE BUSCAN ASEGURAR UN DESALOJO JUNTO A ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

chumbre, servicios básicos y costos de implementación, que podrían fluctuar entre 40 y 1.500 millones de pesos según la infraestructura requerida.

CATASTRO

El delegado explicó que la planificación se apoya en un catastro ya socializado con las instituciones, que permite dimensionar el panorama social del sector Z2. Eselevantamiento arrojó una población de 2.387 personas, compuesta en un 70% por extranjeros —principal-

mente bolivianos— y un 30% por chilenos. Con estos antecedentes, las autoridades buscan identificar a la población y tomar resguardos frente a necesidades especiales. Para febrero, Medalla proyectó que el trabajo se enfocará en revisar la situación de las personas caso a caso, con apoyo del departamento social del municipio, para ratificar y complementar la información recopilada.

Según indicó, los equipos técnicos comenzarán a analizar cada situación con

el objetivo de ofrecer a las familias la posibilidad de abandonar el lugar de manera voluntaria y pacífica, al mismo tiempo que se evalúa si pueden acceder a apoyos estatales. Entre las alternativas se consideran subsidios de arriendo, regularización migratoria y otros beneficios sociales. De esta forma, el Gobierno busca que el desalojo no solo cumpla con la normativa, sino que entregue salidas concretas a las familias en situación de vulnerabilidad.